

APELA. RESERVAS

Señor Juez Federal Subrogante de Esquel:

Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia:

Sergio Aníbal MALDONADO, querellante en mi calidad de hermano de **Santiago Andrés MALDONADO** y por propio derecho, con el patrocinio letrado de **Verónica HEREDIA**, MAT F° 57 T° 942 de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, dirección electrónica 27203819280, constituyendo domicilio ante la Alzada en calle San Martín 890, 2do. Piso, de Comodoro Rivadavia, en Causa **“N.N. s/Desaparición Forzada de Personas”, Expte. 8232/2017**, me presento y respetuosamente digo:

I.- OBJETO

En tiempo y forma –arts. 450, 162, 164, CPPN- vengo a apelar la resolución dictada el 7 de noviembre de 2017 por el señor Juez Dr. Lleral, mediante la cual no hizo lugar a mi petición de conformar de un Grupo de Expertos Independientes en virtud de que entendió garantizada una investigación con las características solicitadas (arts. 1, 18, 75 inc. 22, 108, 110, 114 y 116 de la Constitución Nacional; arts. 1, 4, 5, 7, 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 2, 5, 6, 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. I, II y III de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Ley 26.298). Por los motivos que a continuación indico, solicito a la Cámara de Apelaciones revoque tal resolución por causarme gravamen irreparable y garantice una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a fin de conocer las circunstancias y responsables intelectuales y materiales de la desaparición con vida de mi hermano **Santiago** desde el 1 de agosto hasta el 17 de octubre de 2017 que fue hallado su cuerpo sin vida, tanto de los hechos producidos el 1 de agosto como del proceso de investigación en tal período.

La apelación se presenta en forma temporánea puesto que la notificación por cédula electrónica de la resolución en crisis es de 8 de noviembre de 2017. Constituyo domicilio ante la Cámara de Apelaciones en calle San Martín 890, 2do. Piso, Comodoro Rivadavia.

II. HECHOS

El 1 de noviembre de 2017 solicité al juez subrogante Dr. Lleral que:

- 1.- Se garantice una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a fin de conocer las circunstancias de la muerte de Santiago;
- 2.- A tal fin se requiera la conformación de un Grupo de Expertos Independientes que supervise y coadyuve a la investigación que realice el señor juez.

Conforme surge de la resolución que apelo, la última vez que se vio con vida a Santiago fue el 1 de agosto de 2017 en el lugar denominado “Pu Lof en Resistencia Cushamen”, en circunstancias en que ingresaron violentamente al predio más de 120 personas armadas pertenecientes a la Gendarmería Nacional Argentina, quienes persiguieron a Santiago y a seis o siete personas más hasta orillas del río Chubut. Si bien en la presente investigación la Gendarmería Nacional fue apartada de las actuaciones, hasta la fecha las investigaciones fueron realizadas por el resto de las fuerzas de seguridad dependientes jerárquicamente del Ministerio de Seguridad del cual depende la propia Gendarmería.

Cité en relación a ello una entrevista radial en la que el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, alude a reuniones que mantuvo con fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut. Dicha reunión fue admitida por la señora Ministra de Seguridad ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara de Senadores de la Nación, el 16 de agosto de 2017.

Tal como consta en estos autos, se llevaron a cabo siete rastrillajes en diferentes fechas en el río Chubut alegando buscar a Santiago. En especial resulta relevante las expresiones del buzo Altamirano en las actuaciones del Hábeas Corpus (Expte N° FCR 8233/2017), quien hallara el cuerpo sin vida de Santiago el 17 de octubre del año en cuestión, destacando que en el rastrillaje llevado a cabo el día 18 de septiembre había mejor visibilidad porque el día estaba soleado y el río estaba menos crecido y había menos corriente.

Recordé al señor juez subrogante que desde el 10 de agosto requiero una investigación exhaustiva, efectiva, independiente e imparcial; el hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago en el mismo lugar que fuera inspeccionado por las autoridades del Ministerio de Seguridad desde el 5 de agosto, aumentaron la necesidad de contar con un equipo de expertos, independientes del citado Ministerio.

La necesidad de un equipo de investigadores externos fue advertido por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas; un equipo independiente, estable, que lleve a cabo una investigación sistemática e interdisciplinaria; el cual debería recorrer de modo exhaustivo el lugar de los hechos y hallazgo del cuerpo, interrogar a distintas personas claves para probar qué ocurrió y que, de modo insólito, todavía no declararon en la causa; recoger los restos de la fogata que aun inexplicablemente realizaron los gendarmes el 1 de agosto de 2017, entre otras conductas realizadas en el lugar donde se viera a Santiago por última vez, interrogándose por qué y cómo se efectuó esa fogata; disponer pericias que surjan de esas investigaciones: planimetrías detalladas de cada declaración prestada para destacar concordancias, diferencias y complementariedad entre los relatos y otros hallazgos ya realizados y los aún pendientes.

Indiqué en mi petición de 1 de noviembre, que dicho equipo debería a su vez nutrirse de expertos externos y complementarse con el Grupo de Expertos Independientes - GEI- aún pendiente de conformarse a pesar de haber sido pedido al gobierno el día 29 de agosto y acordado su implementación.

Las características de la investigación que solicité al señor juez subrogante, y que rechazó, son las descritas en la *Guía Nro. 9 para profesionales sobre Desaparición forzada y ejecución extrajudicial: Investigación y sanción*, del Comité de Juristas Internacionales, que acompañé. Ninguna consideración hizo en la resolución atacada, por lo que es uno de los motivos de agravio.

También indiqué y tampoco mención alguna se hizo en la resolución apelada, generando un nuevo agravio que se desarrolla en este escrito, que la investigación debe incluir el *modus operandi* o contexto del accionar de distintos integrantes de Gendarmería y fuerzas policiales de la zona, tal como lo aconsejan todos los protocolos referidos a hechos

de tortura u otros tratos inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas (Protocolo de Estambul, Protocolo de Minesota, entre otros).

Para esa investigación de contexto que dejará al descubierto seguramente el clima de impunidad coadyuvante para que hechos como lo que deben ser investigados ocurra, es que solicité la convocatoria de investigadores de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires para que con la información con que cuentan en sus registros, y en colaboración interinstitucional, puedan colaborar.

Finalmente, hice reserva del caso federal por encontrarse en discusión el alcance de normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.

III.- INDICACION DE LOS MOTIVOS DE LA APELACION

1. Fundamentación sólo aparente. Arbitrariedad de sentencia

1.1. Inicialmente, señala el señor juez de la anterior instancia:

Que las presentes actuaciones judiciales están destinadas a cumplir con el objetivo de la instrucción (art. 193 del C.P.P.N.), esto es determinar si existe un hecho delictuoso, establecer eventualmente la participación de personas en la comisión del mismo y en su caso, verificar si los probables autores resultan responsables y merecedores de una pena; todo ello mediante las pruebas que legalmente se incorporen al proceso.

1.1bis. Observación crítica: la referencia al objeto de la instrucción es genérica y adaptable a cualquier procedimiento penal. Es, precisamente, lo que ha llevado a que se investigue cualquier cosa menos una presunta desaparición forzada de persona, ahora agravada por muerte. Debe observarse que la carátula misma de estas actuaciones exigían y exigen precisar el objeto y los alcances de la investigación conforme el tipo previsto en el Código Penal y los estándares internacionales, la jurisprudencia internacional y la doctrina y jurisprudencia nacionales en la materia. Es lo que pedí siempre y siempre se me contestó y contesta con argumentos en abstracto. No es lo mismo “salir de pesca” para averiguar si se ha cometido algún hecho delictivo, que investigar con rectitud y precisión una presunta desaparición forzada que es la hipótesis de la que debió –y debe- partirse para

determinar la responsabilidad del Estado en tanto actuó en el caso una fuerza estatal – Gendarmería-, hoy, hecho incuestionable. Si esto no se comprende –y no se ha comprendido hasta aquí- entonces resulta extraviado el argumento que no se atiende a dicha hipótesis para obrar en consecuencia.

1.2. Agrega luego el magistrado actuante:

(...) cabe recordar, que el Sistema Republicano de Gobierno que acoge nuestra Constitución Nacional, garantiza la división de poderes y preconiza la vigencia de un Poder Judicial que, a través de los jueces, instituye el ejercicio de un poder jurisdiccional imparcial e independiente (arts. 1, 108, 110, 114 y 116 de la Constitución Nacional).

Al amparo de dichos principios fundamentales, observo que en el presente trámite, la querella del Sr. Sergio Maldonado, puede encontrar las respuestas que pretende consistentes en obtener una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente que permita determinar las circunstancias de la muerte de su hermano Santiago, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el día 17 de octubre de 2017 en el Río Chubut (...)

1.2 bis. Observación crítica: De un lado, cabe resaltar que la Constitución Nacional consagra efectivamente la división de los poderes del Estado pero ello nunca ha podido garantizar que en los hechos fuere cumplido ese diseño de poder. En este tiempo, en cuanto interesa poner de manifiesto aquí, es de público y notorio que en este mismo procedimiento se ha proyectado la influencia del Poder Ejecutivo que ha negado toda posibilidad de la desaparición forzada, en palabras pronunciadas en el Congreso por la Ministra de Seguridad, ejerciendo desde el comienzo una férrea defensa de la fuerza estatal actuante en los actos de represión que igualmente constan, sospechada sobre la base de elementos objetivos ya reunidos.

Es de toda evidencia que nada podía ni puede esperarse de ese Ministerio, en orden a coadyuvar en una investigación exhaustiva e independiente como la que esta parte requiere con base en sus derechos constitucionales y convencionales – que menta el señor juez-, Ministerio, habrá de recordarse siempre y de un modo objetivo y en concreto, del cual dependen las otras fuerzas que han actuado y actúan en este proceso. Baste reproducir las

públicas y notorias presiones del señor Presidente y del Ministro de Justicia ejercida en detrimento de la Procuradora General, hoy renunciante, comprobables desde el inicio de su gestión de gobierno. La funcionaria renunciante ha señalado que se va del cargo para eludir esas las presiones que se han proyectado en su familia según sus afirmaciones. En todo caso son inequívocas las palabras de los funcionarios nombrados publicitadas por todos los medios e incluidas aun en discursos oficiales. Y hay que subrayar a esta altura que el Ministerio Público fue concebido como órgano extra poder en la Asamblea Constituyente de Santa Fe/Paraná en 1994, esto es, con plena autonomía del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo –artículo 120, C.N.-. Es la doctrina recibida por la Corte argentina in re “QUIROGA”. Prueba elocuente de que una cosa es el “deber ser” de la Constitución y muy otra el ejercicio del poder en los hechos. Y traemos a colación el punto por cuanto en un sistema de enjuiciamiento penal de garantías efectivas el MPF es esencial a lo menos para desarrollarlo bajo los principios del acusatorio formal. Es esto lo que extrañamos en el presente caso.

De otra parte, es preciso destacar que la investigación imparcial que solicitamos, en sus términos, con sus alcances y contenidos, no va en desmedro de la intervención de la parte querellante que retiene sus facultades. Pero se trata esta de una intervención “parcial” porque deviene de una parte en el procedimiento. Lo que se pretende es asegurar que la investigación se lleve adelante por quienes no son ni podrían ser parte.

El Grupo de Expertos Independientes que solicito puede conformarse con quienes el señor juez subrogante entienda corresponden, por supuesto no pertenecientes al Ministerio de Seguridad del Poder Ejecutivo Nacional. El 18 de octubre, día posterior al hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago, mi abogada patrocinante junto al perito de parte concurrieron ante el señor juez subrogante para solicitarle que, de manera urgente, ese mismo día, volvieran al lugar del hallazgo a fin de tomar las muestras necesarias de agua, vegetación, fauna; realizar planimetría; verificar la existencia de pozos y obtener toda información que solo en el lugar del hallazgo puede adquirirse. El señor juez afirmó que no volvería a ese lugar porque no contaba con gente para realizar tales tareas por la alegada violencia desplegada por los miembros de la comunidad el día anterior. Sin embargo, mi

abogada y el perito de parte pudieron ingresar al lugar como lo puede realizar cualquier persona que no haya desplegado violencia a los miembros de la comunidad.

El Grupo de Expertos Independientes garantizará la obtención de esa información, relevante e indispensable para conocer la verdad de lo sucedido a Santiago, que hoy el señor juez subrogante no puede obtener.

1.3. Añade después:

(...) Ahora bien, si partimos de sostener la hipótesis de que la Justicia que ejerció sus deberes y facultades en procura de la búsqueda y hallazgo de Santiago Andrés Maldonado, y bregó para garantizar el derecho a la verdad de sus familiares –aún con la participación de auxiliares de la justicia que pertenecen al Estado Argentino-, no está en condiciones de hacer efectivas las garantías esenciales aludidas al comienzo de estos considerandos, debería renunciarse al reconocimiento del poder soberano que posee el Estado Argentino y dar paso a otros estamentos ajenos a las autoridades que instituyeron nuestros constituyentes.

1.3 bis. Observación crítica: En principio, no es posible coincidir con el juez subrogante acerca de que la Justicia ejerció sus deberes y facultades en procura de la búsqueda y hallazgo de Santiago, y bregó para garantizar el derecho a la verdad de sus familiares –aún con la participación de auxiliares de la justicia que pertenecen al Estado Argentino-. Es, más bien, una expresión de deseos que no se compadece con la realidad del procedimiento. Ello, por el contrario, resulta ser de un modo manifiesto lo que está ausente en las actuaciones. Hay que recordar que el anterior magistrado fue apartado luego de la recusación de parte. Es suficiente remitirse a cuanto he venido diciendo, reclamando y denunciando en los autos.

En lo tocante a la supuesta afectación de soberanía –sin detenernos a destacar que el Estado argentino ha prorrogado jurisdicción en tribunales extranjeros- frente a los tratados hay que recordar a KELSEN quien sostenía que ellos no la perjudican ya que tal limitación se basa en la propia voluntad del Estado limitado. Habrá de tomarse en consideración que la Convención de 1994 elevó a su mismo nivel el derecho internacional de

los derechos humanos –artículo 75 (22), C. N.- y, que se sepa, no existe más soberanía que la que campea en el seno de una Asamblea fundacional. Además, el Congreso admitió la competencia de los organismos internacionales al aprobar por ley los Pactos y Tratados suscriptos por el Poder Ejecutivo, luego ratificados. Ese basamento fundacional y legal, compatible con los textos máximos de nuestro orden jurídico nos ha llevado a hacer la petición que ahora rechaza el magistrado de la anterior instancia.

Debe decirse que el señor Juez subrogante no ha hecho mención alguna a la *Guía para profesionales No. 9 - Desaparición forzada y Ejecución extrajudicial: Investigación y sanción* emitida por la Comisión Internacional de Juristas a la que expresamente nos remitimos y adjuntamos; ésta, compuesta de 60 eminentes jueces y abogados de todas las regiones del mundo, tiene por misión la promoción y protección de los derechos humanos a través del Estado de derecho, usando su experiencia jurídica para desarrollar y fortalecer sistemas de justicia nacionales e internacionales. Establecida en 1952, la Comisión goza de estatuto consultivo ante del Consejo Económico y Social de la ONU desde 1957 y está activa en los cinco continentes. La Comisión busca asegurar el desarrollo progresivo y la aplicación efectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, asegurar los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, la salvaguardia de la separación de los poderes, y la garantía de la independencia de la judicatura y de la profesión legal.

2. Violación a la obligación de actuar *ex officio* y de no recaer la investigación en las víctimas. Investigación exhaustiva y completa

Sostuvo el señor juez subrogante Dr. Lleral:

Por otro lado, es fundamental recordar que como parte en el presente proceso ejerce no solo las facultades de perseguir y acusar penalmente a los eventuales autores de los hechos, sino que también puede y debe ofrecer todos los elementos probatorios que sustenten aquellas acciones y ejecutar los actos de contralor de todas las diligencias procesales que se ordenen o que soliciten las demás partes en el proceso penal, como hasta ahora se ha apreciado que lo vienen realizando (arts. 82 y sig. del Código Procesal Penal de la Nación)”.

2.1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en su Sentencia Nro. 229 en el Caso “TORRES MILLACURA” que:

164. Teniendo en cuenta las conclusiones señaladas ... la Corte dispone que el Estado debe remover todos los obstáculos, de *facto* y de *jure*, que mantienen la impunidad en este caso, e iniciar y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de los hechos sucedidos al señor Torres Millacura. El Estado debe dirigir y concluir las investigaciones y procesos pertinentes en un plazo razonable, con el fin de establecer toda la verdad de los hechos. En particular, el Estado deberá:

- a) iniciar y/o culminar las investigaciones pertinentes en relación con los hechos de que fue víctima el señor Iván Eladio Torres Millacura, tomando en cuenta los abusos policiales existentes en la Provincia del Chubut, con el objeto de que el proceso y las investigaciones pertinentes sean conducidas en consideración de estos hechos, evitando omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Dichas investigaciones deben estar dirigidas a la determinación de los autores materiales e intelectuales de los hechos del presente caso, y
- b) asegurarse que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes de manera *ex officio*, y que para tal efecto tengan a su alcance y utilicen todos los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinentes para investigar los hechos denunciados y llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a Iván Eladio Torres Millacura; y que las personas que participen en la investigación, entre ellas, los familiares de las víctimas y testigos, cuenten con las debidas garantías de seguridad.

Es jurisprudencia constante y pacífica del Tribunal de derechos humanos de la OEA que toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación *ex officio*, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva. El Tribunal ha indicado que es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad. Esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía, imponen la obligación de investigar el caso *ex officio*, de modo tal que no dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. En cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente.

2.2. Por ello alejado de la realidad es el argumento del señor juez subrogante en cuanto a:

Que teniendo en cuenta lo dicho, considero que no es pertinente, en esta instancia, la convocatoria de un Grupo Especial de Investigadores como lo pretende la querella que patrocina la Dra. Verónica Heredia. Y ello es así, a mayor abundamiento, debido a que la organización institucional, tanto del poder judicial como también del resto de los organismos que posee el Estado Argentino, pueden dar una respuesta adecuada a las exigencias contenidas en los tratados internacionales que la querella cita, tal como ha ocurrido en los procesos donde esas instituciones del Estado Argentino, investigaron y juzgaron a autores de delitos de lesa humanidad.

Los procesos de investigación de los hechos mas atroces ocurridos durante la última dictadura cívico-militar a los que se refiere el señor juez subrogante, lo fueron principalmente a partir del aporte valiente de las propias víctimas que tuvieron gravísimas consecuencias hasta la desaparición forzada de Jorge Julio López el 18 de septiembre de 2006, hecho aún impune. La investigación fue llevada adelante judicialmente, prescindiendo totalmente de toda persona vinculada de cualquier manera a ese proceso.

2.3. La resolución que se apela no hizo referencia a mi petición de investigar el contexto o *modus operandi* en el cual se enmarcan los hechos del presente proceso a fin de evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Para ello solicité la colaboración de investigadores de la Defensoría de Casación Penal de Buenos Aires ya que cuentan con experiencia y registros en tal sentido.

La omisión de contextualizar los hechos solo garantizará la impunidad y, con ello, la repetición de los hechos aquí denunciados.

IV.- RESERVAS

1. Hago expresa reserva de ampliar los fundamentos aquí indicados, en la audiencia que a tal efecto se disponga por la Cámara Federal de Apelaciones;
2. Formulo protesta de recurrir en casación (Art. 456 CPPN);
3. Conforme lo prevé la Acordada 4/2007 CSJN, mantengo la reserva del caso federal.

V.- PETITORIO

Por lo expuesto, solicito al señor juez subrogante:

- 1.- Tenga por presentado en tiempo y forma la apelación contra su resolución de 7 de noviembre de 2017;
- 2.- Oportunamente, eleve las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones;
- 3.- Tenga presente las reservas formuladas.

A la Cámara Federal de Apelaciones:

- 1.- Disponga la audiencia conforme lo dispone el art. 454 CPPN, solicitando el expediente principal (art. 452 CPPN);
- 2.- Oportunamente, revoque la resolución que se impugna ordenando iniciar, dirigir y continuar una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente en los términos solicitados;
- 3.- A tal efecto convoque a un Grupo de Expertos Independientes a fin de coadyuvar en la investigación que realice el señor juez subrogante;
- 4.- Tenga presente las reservas formuladas.

**Proveer de conformidad que
SERÁ JUSTICIA**